

DICTAMEN POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO.

A las y los Diputados **Noemí Zitle Rivas** (Presidenta), **Mayka Ortega Eguíluz** (Secretaria), **Claudia Lilia Luna Islas** (Secretaria), **Miguel Ángel Peña Flores** (Vocal), **Areli Rubí Miranda Ayala** (Vocal), **Viridiana Jajaira Aceves Calva** (Vocal), **Marcelino Carbajal Oliver** (Vocal), **Rafael Garnica Alonso** (Vocal), **Lucero Ambrocio Cruz** (Vocal), **Humberto Veras Godoy** (Vocal), **Jazmín Calva López** (Vocal), **María Corina Martínez García** (Vocal), **Doralicia Martínez Bautista** (Vocal), integrantes de la Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, nos fue turnado la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 123 de la Ley de Educación del Estado de Hidalgo, presentada por el diputado Jorge Mayorga Olvera; por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción III y 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, la Comisión que suscribe, emite el presente Dictamen con base a los siguientes:

ANTECEDENTES

1. La Comisión Legislativa actuante registró el presente asunto en el Libro de Gobierno, radicado bajo el número **421/2020**;
2. En la iniciativa el diputado promovente menciona que, *México forma parte del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, instrumento jurídico que obliga al Estado a tomar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas,*

hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos reconocidos en ese marco normativo, entre ellos, el derecho a la educación.

La expresión "todas las medidas necesarias" se interpreta en su sentido natural y corriente: todas las posibles y requeridas, entre ellas las financieras, administrativas, jurídicas sociales, educacionales y de cooperación internacional. Hay un conjunto de medidas que son obligaciones concretas para los Estados y que deben ser adoptadas, como mínimo, para no caer en incumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Entre tales medidas se ubican las siguientes:

1. Establecer normas que protejan y garanticen el derecho a la educación superior en los ámbitos público y privado.
2. Generar recursos para la justiciabilidad del derecho, es decir, que permitan su invocación directa ante los tribunales nacionales.
3. Adoptar y aplicar un plan nacional para el suministro de la educación superior que garantice cada uno de sus componentes y prevea mecanismos de supervisión de los progresos alcanzados, así como de lo que queda por hacer al respecto.
4. Financiar hasta el máximo de los recursos de que dispongan para garantizar el derecho a la educación en sus diferentes niveles, dando prioridad a la educación primaria, pero sin desatender el desarrollo progresivo de la educación superior.

La obligación de adoptar las medidas enlistadas resulta tan clara que aun cuando se demuestre que los recursos disponibles son insuficientes, los Estados siguen teniendo los deberes de vigilar el progreso alcanzado en la garantía de los derechos y registrar su falta de realización, así como elaborar estrategias y programas para su promoción y satisfacción, poniendo especial atención en los miembros más vulnerables de la sociedad.

En nuestro país, las instituciones de educación superior históricamente han sido afectadas para la asignación de presupuesto suficiente para cumplir con las metas proyectadas por el Estado, ya que sufren cotidianamente la inercia de los subsidios ordinarios, que tienen además al financiamiento extraordinario como medida compensatoria, derivada de la insuficiencia del subsidio. El presupuesto ordinario de las Instituciones Públicas de Educación Superior no es estable ni suficiente para cumplir con sus funciones sustantivas, lo que pone en riesgo a uno de los sectores estratégicos del Estado.

El actual modelo de financiamiento a las instituciones educativas tiene importantes carencias y efectos negativos: no brinda condiciones de certeza jurídica para destinar los recursos necesarios para abatir los rezagos más urgentes de las instituciones, no genera certidumbre para la planeación de mediano y largo plazo.

La infraestructura y el equipamiento de las instituciones de educación superior constituyen elementos críticos para la formación de los jóvenes. Las universidades tienen la responsabilidad de proporcionar ambientes de aprendizaje adecuados, lo que incluye la calidad y la funcionalidad de las instalaciones físicas, la suficiencia de aulas, la disponibilidad de bibliotecas y espacios necesarios para el desarrollo de métodos de enseñanza innovadores, la conectividad y la adecuada dotación de servicios de electricidad, agua y desagüe, entre otros. Mejorar la

infraestructura física educativa es esencial para fortalecer la motivación de alumnos y docentes, favorecer el desempeño de los estudiantes y enfrentar el abandono escolar.

Una precaria asignación presupuestal a las instituciones de educación superior no dejaría margen alguno para atender la cambiante composición social de la matrícula y el mejoramiento de la calidad de la educación superior. No debe olvidarse que la expansión futura de la cobertura de educación superior no sólo implica un mayor número de estudiantes, sino también y sobre todo una matrícula crecientemente heterogénea. En el futuro ingresarán a las instituciones educativas, cada vez en mayor número, grupos de estudiantes que hasta ahora han visto limitado su ingreso a la educación superior y que tienen tanto un perfil como una gama de intereses, aspiraciones y expectativas diferentes a los que la educación superior suele atender, entre los que destacan estudiantes con alguna discapacidad, jóvenes provenientes de grupos de menores ingresos, indígenas y afrodescendientes, entre otros.

Académicos como Rodolfo Tuirán del Colegio de México, consideran que la educación superior mexicana se encuentra actualmente en un momento decisivo. A pesar de los avances logrados en las últimas décadas, la cobertura actual de la educación terciaria está muy por debajo del nivel que cabría esperar del grado de desarrollo del país y de las expectativas y necesidades de sus jóvenes. De acuerdo con datos del Índice de Competitividad Global 2017-2018, al considerar únicamente el valor de la tasa de cobertura de la educación superior, México ocupó en 2018 la posición 81 de 137 países.



PODER LEGISLATIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

Las regiones con mayor cobertura de la educación superior son Europa Central y del Este (con una tasa de 77.7%) y América del Norte y Europa Occidental (con 76.7), seguidos muy de lejos por América Latina y el Caribe (con 48.4%) (Calderón, 2018). Dentro de esta última región, países de desarrollo relativo similar, como Chile, Argentina, Brasil y Colombia, alcanzaron recientemente tasas de 87%, 80%, 46% y 51%, de manera respectiva. México, con casi 40%, está muy por debajo de esos niveles, sin embargo, su escala del sistema de educación superior es tal que, según el tamaño de la matrícula, ocupa el lugar número 20 en el mundo, sólo superado por Brasil en América Latina, que ocupa el lugar número 15. El tamaño de la matrícula de México es superior al de países como Japón, Alemania, Francia y Reino Unido, entre muchos otros.

La baja tasa de cobertura del país responde tanto a fracturas de los niveles educativos previos, como a las propias evoluciones e insuficiencias de la educación terciaria. Cada año miles de jóvenes que han concluido su bachillerato se ven impedidos, por diferentes razones, a continuar sus trayectorias educativas, incluidos quienes no encuentran cupo en las instituciones de educación superior, sobre todo en las universidades más prestigiadas.

Para abrir las puertas de la educación a los jóvenes, es preciso redoblar el paso. En esta línea, el Presidente López Obrador ha dicho reiteradamente y prometido, tanto en campaña como en el gobierno, que durante su administración "nadie se va a quedar sin la oportunidad de estudiar". Esto supone brindar garantías para que quienes deseen estudiar una carrera profesional, y cuenten con un certificado de bachillerato, lo puedan hacer.

En nuestro Estado, de acuerdo con las estadísticas presentadas por el Secretario de Educación durante su última comparecencia el día 26 de octubre de 2020 en el Congreso Local, el grado de escolaridad de secundaria en Hidalgo es de 9.2, lo que coloca al estado por debajo de la media nacional de 9.6 .

A pesar de estar por debajo del promedio, especificó que el grado de escolaridad aumentó al pasar de 8.7, en el ciclo escolar 2018-2019, a 9.2, en el ciclo 2019-2020.

En secundaria se registraron 171 mil 869 estudiantes distribuidos en mil 335 planteles. Respecto a otros niveles educativos, el secretario indicó que en educación preescolar se matricularon a 112 mil 916 infantes, de 4 a 5 años, en 3 mil 89 planteles; en la primaria fueron atendidos 349 mil 453 estudiantes, en 3 mil 176 escuelas.

En la educación media superior fueron matriculados 147 mil 365 estudiantes, distribuidos en 502 instituciones; mientras que, en educación superior, indicó, se atienden a 115 mil 714 jóvenes en 110 instituciones. En total, durante el ciclo escolar 2019-2020, en los diferentes niveles que integran el sistema educativo estatal, se registraron 54 mil 314 directivos, docentes y personal de apoyo, señaló el titular de la SEPH.

En cuanto a la deserción escolar para el ciclo escolar 2020-2021, el secretario externó que no se reinscribió el 5 por ciento de alumnos de nivel superior, 2 por ciento de medio superior y 2.7 por ciento de nivel básico. Aunque las cifras presentadas son bajas, nuestro trabajo como legisladores es tratar de fortalecer el marco normativo local para impedir que los alumnos dejen las aulas e impulsarlos para su desarrollo.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que la Comisión que suscribe, es competente para conocer sobre el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 75 y 77 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

SEGUNDO. Que la Ley General de Educación, en su artículo 1, establece que, *el objeto es regular la educación que imparta el Estado -Federación, Estados, Ciudad de México y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, la cual se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado.*

La distribución de la función social educativa del Estado, se funda en la obligación de cada orden de gobierno de participar en el proceso educativo y de aplicar los recursos económicos que se asignan a esta materia por las autoridades competentes para cumplir los fines y criterios de la educación.

En congruencia a lo anterior, en el Título Octavo de la mencionada ley, donde se aborda el tema sobre el financiamiento a la educación, en donde el artículo 119, establece que, *el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual en términos de la ley que el Estado destine al financiamiento en educación pública y en los servicios educativos garantizando la accesibilidad y la gratuidad en la educación, no podrá ser menor al equivalente del 8% del producto interno bruto del país. De este monto, se destinará al menos el 1% del producto interno bruto al gasto para la educación superior y la investigación científica y humanística, así como*

al desarrollo tecnológico y la innovación en las instituciones públicas de educación superior.

En la asignación del presupuesto de cada uno de los niveles de educación, se procurará cubrir los requerimientos financieros, humanos, materiales y de infraestructura, así como de su mantenimiento, a fin de dar continuidad y concatenación entre dichos niveles, con el fin de que la población escolar tenga acceso a la educación, con criterios de excelencia.

Los recursos federales recibidos para la prestación de los servicios educativos por cada entidad federativa no serán transferibles y deberán aplicarse íntegra, oportuna y exclusivamente a la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad. El gobierno de cada entidad federativa, publicará en su respectivo diario oficial, los recursos que la Federación le transfiera para tal efecto, en forma desagregada por nivel, programa educativo y establecimiento escolar.

El gobierno de cada entidad federativa prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal y las instancias fiscalizadoras en el marco de la ley respectiva, verifiquen la correcta aplicación de dichos recursos.

Las instituciones públicas de educación superior colaborarán, de conformidad con la ley en la materia, con las instancias fiscalizadoras para verificar la aplicación de los recursos que se le destinen derivados de este artículo.

Por otra parte **La Ley General de Educación Superior**, establecerá las disposiciones en materia de financiamiento para dar cumplimiento a la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior, incluyendo las responsabilidades y apoyos de las autoridades locales.

Asimismo en si artículo 121, se establece que, en el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos anteriores de este Capítulo el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines del desarrollo nacional. En todo tiempo procurarán fortalecer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, en términos reales, para la educación pública.

Del mismo modo, en el artículo 62 de la citada ley, se establece que, la Federación y las entidades federativas concurrirán en el cumplimiento progresivo, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, del mandato de obligatoriedad de la educación superior y al principio de gratuidad en la educación en términos de lo establecido en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la concurrencia del Estado para el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior se considerará las necesidades nacionales, regionales y locales de la prestación del servicio de educación superior y se sujetará a las disposiciones de ingreso, gasto público, transparencia, rendición de cuentas y fiscalización que resulten aplicables.

El monto anual que el Estado destine a la educación pública del tipo superior será en términos de lo establecido en el artículo 119 de la Ley General de Educación y dicho monto no podrá ser inferior a lo aprobado en el ejercicio inmediato anterior, en términos de las disposiciones aplicables.

Asimismo en su artículo 63, se tiene que, *en la integración de los presupuestos correspondientes, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria, en su caso, se contemplarán los recursos financieros, humanos, materiales y la infraestructura necesarios para el crecimiento gradual, desarrollo y cumplimiento de las funciones de las instituciones públicas de educación superior, bajo los mandatos constitucionales de obligatoriedad y gratuidad, además de los criterios de equidad, inclusión y excelencia.*

TERCERO. Que el Artículo 53 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, establece que, *la Secretaría a través de sus diversas oficinas, efectuará los cobros y los pagos correspondientes a las dependencias.*

La ministración de los fondos correspondientes será autorizada en todos los casos por la Secretaría, de conformidad con el Presupuesto de Egresos.

El Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, podrá disponer que los fondos y pagos correspondientes a las entidades, se manejen, temporal o permanentemente de manera centralizada.

Asimismo, podrá suspender, diferir o determinar reducciones en la ministración de los recursos, cuando las dependencias y entidades no cumplan con las disposiciones de la Ley de Ingresos, del Presupuesto de Egresos, de esta Ley y su Reglamento o se presenten situaciones supervenientes que puedan afectar negativamente la estabilidad financiera, reportando al respecto en los informes trimestrales.

CUARTO. Que, el Producto Interno Bruto, es un indicador económico básico, el cual sirve para conocer cuánta riqueza genera un país y la

dimensión y composición de su economía. El Producto Interno Bruto agrega toda la producción generada en un país o, más concretamente, mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales (los que compra el usuario final) producidos dentro de un país, por nacionales y extranjeros.

El dato es normalmente trimestral o anual, y se suele calcular en dólares actuales o de un año específico, pero también en moneda local. Eso permite comparar valores en el tiempo o entre países, y de ahí su utilidad y su uso extendido en Gobiernos, organismos internacionales y medios de comunicación.

Por lo que atendiendo a los antecedentes y las consideraciones vertidas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 55 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 140, 141, 142 y demás relativos aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, emite el siguiente:

DICTAMEN

PRIMERO. Las y los Diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, consideramos que es de aprobarse la adición de un párrafo al artículo 123 de la Ley de Educación del Estado de Hidalgo.

Por lo que con fundamento en el artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, los Diputados integrantes de la Primera Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto de este Poder Legislativo, sometemos a la consideración de este Pleno, el siguiente proyecto de:

DECRETO:

**QUE APRUEBA LA ADICIÓN DE UN
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 123 DE LA LEY
DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE
HIDALGO.**

ARTÍCULO ÚNICO. Se aprueba la **adición de un párrafo al artículo 123 de la Ley de Educación del Estado de Hidalgo; para quedar como sigue:**

Artículo 123. ...

Los recursos presupuestales aprobados por el Congreso del Estado para el desarrollo de las funciones de las instituciones de educación, deberán ser prioritarios, oportunos, suficientes, crecientes en términos reales y no podrán ser inferiores a los otorgados en el ejercicio inmediato anterior.

TRANSITORIO

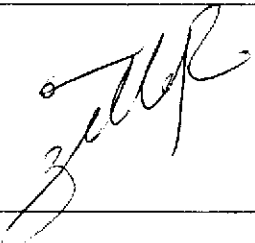
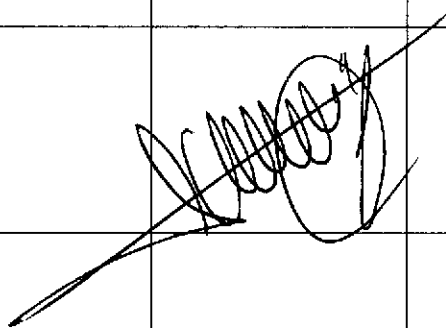
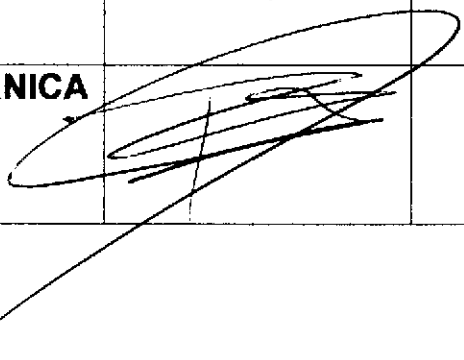
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.

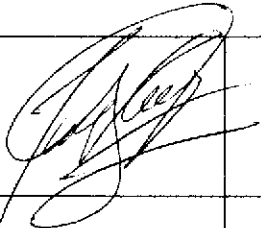
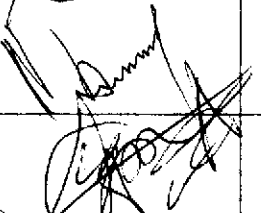
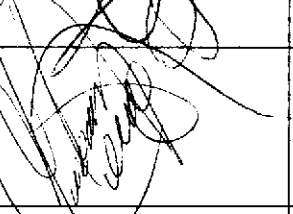

Dado en la Sala de Comisiones del Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en la ciudad de Pachuca de Soto, a los veinticuatro días del mes de junio de dos mil veintiuno.



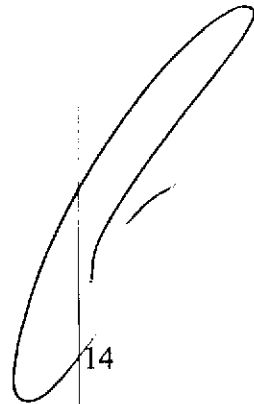
PODER LEGISLATIVO
GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

**POR LA PRIMERA COMISIÓN PERMANENTE
DE HACIENDA Y PRESUPUESTO**

DIPUTADO/A	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENCIÓN
DIP. NOEMÍ ZITLE RIVAS PRESIDENTA			
DIP. MAYKA ORTEGA EGUILUZ SECRETARIA			
DIP. CLAUDIA LILIA LUNA ISLAS SECRETARIA			
DIP. MIGUEL ÁNGEL PEÑA FLORES VOCAL			
DIP. ARELI RUBÍ MIRANDA AYALA VOCAL			
DIP. VIRIDIANA JAJAIRA ACEVES CALVA VOCAL			
DIP. MARCELINO CARBAJAL OLIVER VOCAL			
DIP. RAFAEL GARNICA ALONSO VOCAL			

DIP. LUCERO AMBROCIO CRUZ VOCAL			
DIP. HUMBERTO VERAS GODOY VOCAL			
DIP. JAZMÍN CALVA LÓPEZ VOCAL			
DIP. MARÍA CORINA MARTÍNEZ GARCÍA VOCAL			
DIP. DORALICIA MARTÍNEZ BAUTISTA VOCAL			

ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL DICTAMEN POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 123 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE HIDALGO.



14